

El Crecimiento de la Criminalidad en América Latina: Un tema Urgente

Bernardo Kliksberg*

* Autor de varias decenas de libros sobre la pobreza, y los problemas sociales de difundida utilización internacional y traducidos a diversos idiomas. Ha prestado asesoría en la lucha contra la pobreza a numerosos países. Ha sido asesor de la ONU, UNICEF, OEA, OIT, y otros organismos internacionales, y ha dirigido el Proyecto de la ONU para América Latina y el Caribe de gestión social. Designado Profesor Honorario, Profesor Emérito, y Doctor Honoris Causa por diversas Universidades del Continente, entre ellas por la Universidad del Zulia y de Buenos Aires. Entre sus últimas obras: Pobreza. Nuevas perspectivas a nivel mundial (Fondo de Cultura Económica); Como enfrentar la pobreza (Fondo de Cultura Económica); Toward an intelligent State (ONU, IAS Press, New York); Capital social y cultura. Claves del desarrollo (Fondo de Cultura Económica).

Recibido: Septiembre 2002

I. UN CLIMA DE ALERTA EN ASCENSO

Los índices de criminalidad de América Latina se han disparado en las dos últimas décadas. Según señala la Revista The Economist todas las ciudades de la región son hoy más inseguras que hace 10 años atrás. La ciudadanía tiene una sensación de inseguridad en la gran mayoría de los centros urbanos. Incluso ciudades consideradas tradicionalmente "seguras" han visto rápidos deterioros en la situación.

El problema aparece en todas las encuestas de opinión como uno de los que más preocupan a la población. Existen ciudades donde porcentajes significativos de la población han tenido la experiencia de un asalto, un robo en un taxi, u otras formas de ataque delictivo. La población se pregunta con ansiedad, ¿qué está sucediendo?, ¿cómo puede enfrentarse?, ¿qué puede esperarse?

Estos climas de alarma generalizada son propicios a la aparición de tesis extremas, que encuentran receptividad ante al

desesperación por resultados rápidos que surge de amplios sectores. Este trabajo aspira sobre todo a indicar que a pesar del apremio es imprescindible mejorar la calidad del debate actual sobre un tema tan importante. Se hacen necesarios análisis basados en evidencia seria sobre las características del problema.

Es indispensable contar con estudios objetivos que superen los slogan sobre los factores que están impulsando estos inquietantes desarrollos. Es preciso también tener en cuenta la vasta experiencia internacional al respecto. Solo sobre la base de un acercamiento profundo a la complejidad del problema, será posible diseñar soluciones que tengan efectividad real.

Tratando de contribuir a estimular la tarea colectiva en estas direcciones se desenvuelven a continuación varios momentos de análisis sucesivos. Primero, se acerca información básica sobre la situación. Segundo, se indagan algunas de sus posibles causas. Tercero, se plantean algunas de las líneas principales de la

discusión existente sobre respuestas posibles.

Finalmente se extraen conclusiones, enfatizando especialmente ciertos riesgos de la dirección actual del debate sobre el avance de la criminalidad en la región.

II. ALGUNOS HECHOS

Los datos disponibles no dejan lugar a dudas sobre la gravedad del tema. Se estima que América Latina tiene 30 homicidios cada 100,000 habitantes de población por año. Esa es una tasa que multiplica por seis la de los países que tienen una criminalidad moderada, como la mayoría de los países de Europa Occidental.

La magnitud de la criminalidad en la región, ha determinado que sea considerada una criminalidad "epidémica". Es la instalación de un problema estructural que se está propagando. Las tendencias son por otra parte muy preocupantes. Las tasas tienden a ascender en los años recientes.

Los estudios del BID y otras organizaciones indican que América Latina es hoy la segunda zona con mas criminalidad del mundo después del Sahara Africano. En la encuesta Latín barómetro 2001, realizada en 17 países de la región, cuatro de cada cinco entrevistados dijeron que la delincuencia y la drogadicción habían aumentado mucho en sus países en los últimos tres años.

El porcentaje es superior al que se obtuvo en una edición similar de la encuesta en 1995 (fue 65%). Más alarmante aún, dos de cada cinco señalaron que ellos o un miembro de su familia habían sido objetos de un delito en los últimos 12 meses.

Prestigiosas instituciones internacionales como la Organización

Panamericana de la Salud considera a la criminalidad de la región, un problema central de salud pública.

Las estadísticas señalan que entre otras consecuencias se ha transformado en una de las principales causas de muerte de población joven. En algunos países incluso en períodos de tiempo recientes su magnitud ha llevado a la reducción demográfica de la población joven de ciertos niveles de edad.

La reacción frente a un fenómeno que amenaza directamente la vida cotidiana de buena parte de la población ha sido de envergadura. Así datos recientes del BID (2001) estiman que Brasil gasta anualmente entre los fondos públicos destinados a seguridad, y los gastos privados en la materia, 43.000 millones de dólares lo que representa el 10.3% de su producto bruto interno.

En ciudades como Río de Janeiro y Sao Pablo el número de homicidios cada 100.000 habitantes casi dobla la muy elevada media de toda la región. El gasto que se dedica a seguridad en Brasil es mayor que toda la riqueza producida en un año por una de las economías más vigorosas de la región, Chile.

En Colombia la dedicación de recursos públicos y privados a seguridad es aun mayor. Se estima que se gasta en este rubro el 24.7% del Producto Bruto Interno. En Perú, la asignación de recursos de la economía a este rubro significa el 5.3% del Producto Bruto Interno.

El gasto en seguridad esta subiendo fuertemente en casi toda la región. En economías como las latinoamericanas que están luchando duramente para conseguir tasas de crecimiento que superan el 3% o el 4% anual, dedicar proporciones tan importantes del Producto Nacional a este problema implica un peso fenomenal para la economía, y una sustracción en gran escala de recursos que se necesitan con apremio para áreas productivas.

INDAGANDO CAUSAS

¿Por que estas, tan preocupantes tendencias?. ¿Que ha llevado a estas sociedades a tales niveles de desarrollo de la delincuencia, catapultándolas a convertirse en algunas de las mas riesgosas de todo el planeta? ¿Porque a pesar de la enorme inversión en seguridad pública y privada, y el fuerte crecimiento de la población carcelaria, las tasas de criminalidad no están retrocediendo sino por el contrario han aumentado?

El tema es de gran complejidad, y requiere ser abordado desde diversas perspectivas. Son imprescindibles análisis desde la economía, el desarrollo social, la cultura, la educación, los valores, y otras dimensiones. Además, el fenómeno debe desagregarse. Hay diversos circuitos de criminalidad operando en la región.

Uno muy relevante que ha crecido fuertemente según los indicios es el vinculado a la droga, problema mundial, de múltiples implicancias y ampliamente estudiado. Buena parte de la criminalidad común tiene otras características. Son delitos cometidos en una alta proporción por jóvenes, Su tasa asciende, y forman parte desafortunadamente de la crónica periodística diaria de casi todas las sociedades de la región.

Es imposible dejar de observar que sin dejar de lado variables históricas, culturales, demográficas, y otras, los índices de esa criminalidad muy central en la región, han subido paralelamente al deterioro de los datos sociales básicos en las ultimas décadas.

Esta es una región, donde la pobreza ha crecido según señalan los análisis de la CEPAL en términos tanto absolutos como relativos. Las cifras indican que el numero de pobres es hoy mayor que en 1980, y asimismo ha subido el porcentaje que representan en el conjunto de la población que se acerca a la mitad de la misma.

Asimismo, se han elevado las tasas de desocupación abierta que hoy promedian el 11%. Los análisis del PREALC de la OIT (1999), subrayan que otro desarrollo muy preocupante es la degradación de la calidad de los trabajos disponibles. Cerca del 60% de la mano de obra activa trabaja hoy en el sector informal, la gran mayoría en tareas auto generadas para sobrevivir, con pocas posibilidades de futuro, sin apoyo tecnológico ni crediticio.

Como consecuencia de todo ello, la productividad de estas ocupaciones es de un cuarto a un tercio de la productividad de los puestos de trabajo en la economía formal. Los ingresos de los informales han tendido a reducirse. Ganan cada vez menos en poder adquisitivo, y trabajan mas horas.

A todo ello se suman graves problemas de cobertura y acceso de amplios sectores de la población a servicios adecuados de salud publica y educación y a la vivienda. Uno de cada cinco partos se hace sin asistencia médica de ningún tipo, lo que lleva a una tasa de mortalidad materna que es cinco veces la del mundo desarrollado. El deterioro social se expresa incluso en deficiencias nutricionales severas.

Según el Panorama Social de la CEPAL 2000, la tercera parte de los niños de América Latina de menos de dos años de edad, están hoy en situación de “alto riesgo alimentario”.La pobreza latinoamericana no tiene explicaciones fáciles. No obedece a escaseses de recurso naturales o grandes guerras como en África.

Se trata de una zona privilegiada, de inmensas reservas de materias primas estratégicas, grandes posibilidades de generación de energía barata, excelentes potenciales para la producción agropecuaria, y una muy buena ubicación geoeconomica. Los factores naturales están a favor. Tampoco ha sido escenario de guerras cruentas como Europa o África.

El deterioro social está ligado a múltiples factores, pero uno de los mas influyentes según indican numerosas investigaciones recientes es el aumento de las polarizaciones sociales que ha llevado a que

hoy América Latina sea considerada el Continente más desigual de todo el planeta. El 10% más rico de la población tiene 84 veces el ingreso del 10% más pobre, y la región presenta el peor coeficiente de desigualdad en la distribución de los ingresos.

Asimismo, registra pronunciadas desigualdades en el acceso a la tierra y otros bienes de capital, en la posibilidad de obtener créditos, y en el campo educativo(1). Según estudios del BID (1999) mientras que la escolaridad promedio de los jefes de familia del 10% más rico de la población es de 12 años la del 10% más pobre es de 5 años, hay una brecha de 7 años que va a tener efectos muy intensos en las chances de conseguir trabajo, lo que unos y otros van a ganar, y otros múltiples planos.

La desigualdad aparece según analistas como Birdsall, Ross y Sabot (1998) como la traba fundamental para que en la región pueda darse un crecimiento económico sostenido. La acentuación de las polarizaciones sociales han tenido como una de sus consecuencias, la crisis que experimentan los estratos medios en diversos países.

Este sector de la sociedad clave para el desarrollo, se ha visto muy afectado en las dos últimas décadas. Así en Argentina poseedora históricamente de una gran clase media, según los cálculos de López (2001), 7 millones de personas dejaron de ser clase media en la década de 1990-2000, pasando a ser pobres. Ha crecido fuertemente en la región un nuevo estrato social indicador de movilidad descendente, los "nuevos pobres".

Las amplias desigualdades generan como es notorio agudas tensiones sociales. La población las resiente fuertemente en las encuestas de opinión. Tiene conciencia de su envergadura, y las considera en forma ampliamente mayoritaria, injustas e inaceptables. La convivencia de privaciones agudas por la pobreza, y amplias brechas sociales crea un clima social de alta conflictividad potencial.

En ese clima se están dando los desarrollos actuales en materia de delincuencia. Sin caer en simplificaciones es imposible dejar de observar que dicho clima crea una serie de condiciones propicias a esos desarrollos de modo directo e indirecto. Una de las más estudiadas recientemente es la sensación de amplios sectores de que han pasado a ser excluidos, que se hallan fuera de los marcos de la sociedad.

Los estudios disponibles permiten ver asimismo como algunos componentes de este proceso de deterioro social inciden directamente sobre el aumento de la criminalidad. Se observan significativas correlaciones estadísticas en tres áreas, que no agotan de ningún modo la causalidad de la criminalidad pero que aparecen como claves para entenderla.

La primera área ha sido estudiada con frecuencia. Hay correlación robusta entre el ascenso de la delincuencia, y las tasas de desocupación juvenil. Análisis de los últimos años en varias ciudades de los Estados Unidos demuestran claramente que el descenso de las tasas de delincuencia ha tenido como una razón esencial los buenos niveles de las tasas de ocupación, y el aumento de los salarios mínimos de la economía.

En América Latina la tendencia ha sido inversa. Las elevadas tasas de desocupación general, son aun mucho mayores entre los jóvenes. En muchos países la desocupación juvenil duplica y hasta triplica la tasa de desocupación promedio superior al 20% en buena parte de la región. Los salarios mínimos por otra parte han perdido poder adquisitivo marcadamente.

Ello significa que un amplio sector de la población joven no tiene posibilidades de insertarse en la economía, o solo puede alcanzar ingresos que los colocan bien por debajo del umbral de la pobreza. El potencial explosivo de estas situaciones es muy amplio. Se hace aun más intenso cuando la desocupación es por períodos prolongados, forma de desocupación es típica hoy de diversas realidades de la región. Según los análisis del Nóbel de

Economía Robert Solow (1985) los desocupados en esas condiciones tienden a abandonar del todo la búsqueda de trabajo.

Su autoestima personal está muy dañada por la situación, su personalidad se resiente, y deciden no ir más a buscar trabajo para evitar nuevos rechazos que pueden afectarlos aún más cuando se hallan tan vulnerables. También tienden a retraerse socialmente.

Una segunda área de correlaciones intensas es la que vincula deterioro familiar con delincuencia. Una investigación en USA sobre criminalidad juvenil (Dafoe Whitehead, 1993) examinó la situación familiar de una amplísima muestra de jóvenes en centros de detención juvenil. Verificó que más del 70% provenían de familias desarticuladas, con padre ausente.

En América Latina, un estudio en una de las sociedades con mejores récords sociales como el Uruguay (Katzman, 1997) encontró similar correlación. Dos terceras partes de los jóvenes internados por delitos, venían de familias con un solo cónyuge al frente.

La familia es claramente una institución decisiva en materia de prevención del delito en una sociedad. Si es una familia que funciona bien, impartirá valores y ejemplos de conducta en las edades tempranas que serán después fundamentales cuando los jóvenes deban elegir en sus vidas frente a encrucijadas difíciles. Si entra en proceso de desarticulación deja de cumplir dicha función. Así parecen evidenciarlo los estudios mencionados.

En la región, esta institución clave en la acción antidelictual está sufriendo severos deterioros bajo el impacto de la agravación de la pobreza. El fenómeno es complejo pero las cifras indican que numerosas familias pobres y de clase media, sufren tensiones extremas ante períodos de desocupación prolongada, y privaciones económicas graves y ellas terminan por desarticular la familia.

Se estima que más del 20% de las familias de la región son hoy familias donde solo ha

quedado a su frente la mujer. Se trata en su gran mayoría de mujeres pobres, que defienden con gran coraje a sus hijos pero que deben hacerlo en condiciones durísimas.

También están subiendo en la región los índices de violencia doméstica (Buvinic, 2000). La misma responde a múltiples razones, pero una de ellas de alta incidencia, es el gran stress socioeconómico que sufren numerosos hogares. La violencia hacia el interior del hogar, puede ser después un estimulante agudo de la insensibilización ante el ejercicio de la violencia.

Una tercera correlación es la observable entre niveles de educación y criminalidad. La tendencia estadística que admite desde ya todo orden de excepciones es que si aumentan los grados de educación de una población, descienden los índices delictivos. En América Latina a pesar de importantes esfuerzos en materia educativa, los problemas son agudos. Si bien se ha conseguido que la gran mayoría de los niños se matriculen en primaria, casi un 50% deserta antes de completar la escuela.

Asimismo son altas las tasas de repetición. La deserción y la repetición están incididas por la pobreza. Ella lleva a que más de 17 millones de niños menores de 14 años trabajen obligados por la necesidad y un porcentaje significativo de niños padecen de desnutrición y otras carencias. A todos ellos les resulta muy difícil cursar estudios en esas condiciones. El promedio de escolaridad de la región es de solo 5.2 años, menos de primaria completa.

Estos tres grupos de causas alta desocupación juvenil, familias desarticuladas, y bajos niveles de educación están gravitando silenciosamente día a día sobre las tendencias en materia de delincuencia. A su vez forman parte del cuadro más general de pauperización de la región. Resulta imposible no vincular por ejemplo el aumento de la criminalidad en la Argentina, hace décadas atrás una sociedad con índices muy bajos, con el hecho de que según se estima la población pobre paso de cerca del 5% en los inicios de los 70, a 41%

del total de población actualmente (Bermúdez, Clarín 2001), y a que las desigualdades crecieron pronunciadamente particularmente en la década del 90,

EL DEBATE SOBRE LAS SOLUCIONES

¿Que hacer frente a una situación que constituye una amenaza concreta para la vida cotidiana en las grandes ciudades, y que deteriora profundamente la calidad de vida?. ¿Cómo enfrentar la escalada de la criminalidad que se ha agravado año tras año en la última década? ¿Que hacen otras sociedades?

Si bien hay una gama enorme de propuestas, es posible diferenciar dos grandes posiciones que tienen representación muy fuerte en el debate público en la región. Trataremos de presentarlas sumariamente.

La primera, la que podríamos llamar “la vía punitiva” pone el énfasis en adoptar urgentemente medidas de acción directa. Aboga por aumentar el número de efectivos policiales, dar mayor discrecionalidad a la policía, modificar los códigos penales para reducir las garantías que según ella “obstaculizan” el trabajo policial, aumentar el gasto en seguridad en general. Asimismo, plantea bajar la edad de imputabilidad, hacer responsables y encarcelables a los niños desde edades muy tempranas, incluso llega a proponer hacer responsables de sus delitos a los padres.

En versiones muy extremas de esta tesis, ha aparecido en algunos países los que diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado como la ejecución extrajudicial de delincuentes, o sospechosos e incluso grupos de exterminio organizados. Propugna en general castigar muy duramente cualquier falta. En ello sostiene estaría la mejor educación para el delincuente joven, en el castigo duro.

La otra posición que podría denominarse “la vía preventiva” señala que el camino anterior es equivocado, y está llevando a lo contrario de lo que busca. Obtiene algunos

efectos aparentes de corto plazo pero son siempre pasajeros. A mediano y largo plazo los índices delictivos siguen subiendo. La posición es expuesta con gran vigor, y amplia evidencia empírica entre otros por Louis Wacquant en una obra reciente “Las cárceles de la miseria” (Ediciones Manantial, 2000).

Wacquant renombrado Investigador del Colegio de Francia y Profesor Asociado de la Universidad de Berkeley, analiza los datos, el debate mundial, los estudios de las principales Universidades y centros del mundo y plantea que la punición da resultados muy pobres. Así la población carcelaria de los países que la practican crece rápidamente, como esta sucediendo en América Latina, se genera lo que denomina un Estado hipertrofiado en el área de la represión, sin embargo, los delitos no disminuyen.

Al revés, subraya “Es sabido que el encarcelamiento además de afectar prioritariamente a las capas más desprovistas, desocupados, precarios, extranjeros, es en sí mismo una tremenda máquina de pauperización. Al respecto es útil recordar sin descanso las condiciones y los efectos deletéreos de la detención en la actualidad, no solo sobre los reclusos sino también sobre sus familias y sus barrios”.

Destaca que en su opinión a América Latina se le esta “vendiendo” una visión no correcta de la realidad. Así no se conoce mayormente en la región la experiencia de las ciudades americanas que realmente han tenido mas logros en reducción seria de la delincuencia de USA, como San Diego y Boston.

Ellas optaron por un enfoque netamente preventivo, haciendo participar a toda la comunidad y a las iglesias en la lucha contra ella y desarrollaron vigorosos programas de apoyo a los jóvenes desfavorecidos. Su ejemplo ha sido adoptado por múltiples ciudades americanas, y tienen una tasa de policías por habitante mucho menor que las ciudades que enfatizaron la vía punitiva. Advierte que hay varios desarrollos interrelacionados: El retiro del Estado de la

economía en diversos países, el debilitamiento en ellos del Estado social, el crecimiento de una masa creciente de excluidos ligado a lo anterior, y la aparición entonces de lo que llama “el Estado penitenciario”.

UNA MIRADA DE CONJUNTO

La presión del ascenso de los hechos delictivos es muy grande en América Latina. Es terreno fácil para la aparición de propuestas demagógicas que ofrecen salida rápida. Ante el miedo y la incertidumbre la tesis punitiva tiene amplio terreno para prosperar.

Sin embargo, es necesario mirar mas lejos y tener en cuenta seriamente, la experiencia mundial. A pesar del incremento acelerado de los gastos en seguridad públicos y privados en los países de la región, y de la “flexibilización” de garantías jurídicas y procesales en muchos casos, la ola delictiva no retrocede. Es posible inferir que estas políticas no están tocando sus causas de fondo.

Exceptuando como se anoto anteriormente circuitos delictivos que son empresas criminales organizadas como el de la droga y otros, que requieren una respuesta contundente de la sociedad que tiene todo el derecho a defenderse de ellos, una parte importante del delito esta ligado estrechamente al cuadro general de deterioro social, y al crecimiento de la pobreza y la desigualdad.

Atacar los factores estratégicos requiere que las sociedades inviertan fuertemente en aumentar las oportunidades ocupacionales para los jóvenes, crear espacios para los millones de jóvenes que están hoy fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo, como entre ellos expandir sus posibilidades de acceso a actividades culturales y deportivas, desarrollar políticas sistemáticas de protección a la familia y fortalecer la educación pública.

Joseph Stiglitz, ex Vicepresidente del Banco Mundial, ha señalado que de acuerdo a estudios de costos, en el caso de USA

arrestar a un delincuente joven, juzgarlo, y encarcelarlo, es mucho más costoso que invertir en que tuviera la posibilidad de una beca para estudiar, con la diferencia notable de que lo segundo reduce la tasa de criminalidad y lo primero no. El mismo razonamiento parece según los datos tener plena validez en América Latina.

Por otra parte este es un desafío que debería concitar una acción colectiva. Estado y sociedad civil deberían sumar sus esfuerzos como lo hacen en ciudades como las antes mencionadas y otras para llevar adelante un gran esfuerzo concertado de acción comunitaria orientado a crear oportunidades de trabajo y desarrollo para los desfavorecidos.

Si se margina como se esta dando en diversos países una discusión a fondo sobre las causas estructurales de estas alarmantes tendencias, se concentra la acción en la mera punición, y se ponen entre paréntesis derechos básicos del sistema democrático para facilitarla, se corre un gravísimo riesgo. Es posible avanzar en un camino que de hecho, aún sin proponérselo, esté “criminalizando la pobreza”.

Los desfavorecidos pasaran a ser vistos crecientemente como “sospechosos en potencia”, que deben ser encerrados tras barreras protectoras. Un líder indígena del Continente explicaba recientemente que ellos son los mas pobres de los pobres, 40 millones de personas que viven en su mayoría en pobreza extrema, y que están teniendo la impresión de que se ha implantado un nuevo delito que llamaba “portación de cara”, con frecuencia son indagados o vistos con suspicacia solo por su rostro y su aspecto.

Sería muy terrible para el perfil de sociedad libre y plena de oportunidades a que aspiran los pueblos de la región que quienes más sufren el deterioro económico y social, en lugar de ser apoyados y ayudados, sean discriminados y aislados.

América Latina se halla en una verdadera encrucijada histórica ante el angustiante

problema del ascenso de la delincuencia. ¿Por que camino optara? ¿Vá en la dirección de la criminalización de la pobreza, o el de la integración social? Corresponde profundizar en la democracia este debate trascendental, reemplazar los slogans y los efectismos, por datos serios, apuntar a las causas estructurales del problema, y tener en cuenta que se está jugando en definitiva nada menos que la calidad moral básica de nuestras sociedades.

NOTAS:

(1) Pueden encontrarse datos cuantitativos detallados sobre las tendencias en desigualdad en la región y sobre las investigaciones recientes al respecto en Bernardo Kliksberg (1999), **Desigualdad y Desarrollo en América Latina. El debate postergado.** Reforma y Democracia No. 19, Revista del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Caracas, Venezuela.

REFERENCIAS:

- Banco Interamericano de Desarrollo (1999). Informe de Progreso Económico y Social dedicado a la desigualdad. Washington.
- Birdsall Nancy, Ross David, y Sabot Richard (1996). La desigualdad como limitación para el crecimiento en América latina. Revista OIKOS, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.
- Buvinic Mayra, Morrison Andrew, Shifter Michael (1999). "Violence in the Americas" en Morrison Andrew, M.L. Biehl "Too close to home", BID, Washington.
- Bermúdez, Ismael (13/08/2001). "En Capital y Gran Buenos Aires hay casi 4 millones de personas pobres". CLARIN, Buenos Aires.
- CEPAL (2000), Panorama Social de América Latina 2000. Chile.
- Katzman, Rubén (1997), Marginalidad e Integración Social en Uruguay. Revista de la CEPAL, No. 62, agosto.
- La Nación (13 de agosto/2001), El precio de la violencia en Brasil. Buenos Aires.
- Latín barómetro (2001), Medición de Opinión Pública. Chile.
- López, Artemio (2001), Citado por La Nación, Buenos Aires.
- Solow Robert (1985), Mass unemployment, as a Social Problem. En Basu, Pattanaik, Suzumura "Choice, Welfare and Development. Oxford, Clare Dom Press.
- Tockman, Víctor (18/12/1998). El desempleo no se va de América Latina, CLARIN, Buenos Aires.
- Wacquant, Loic (2000). Las cárceles de la miseria. Editorial Manantial. Buenos Aires.
- Whitehead, Dafoe (1993). Dan Quayle was right. The Atlantic Monthly, New York, April.

Para volver a la Pantalla Inicial Presione

[..\Revista Formaciòn Gerencial.ppt](#)